



Representación de la
República Argentina
Organismos Internacionales en Ginebra

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

CMH/aek
IV/100-8
No. 59/2021

La Misión Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra presenta sus atentos saludos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - *Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas* -, y con relación a la Nota Verbal CMH/aek N° IV/100-8, fechada el 5 de marzo de 2021, tiene el agrado de remitir una nota de la Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Laura Kletzel, así como el informe del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, para dar respuesta a la Comunicación Conjunta AL ARG 01/2021 relativa al caso de Paola Estefanía Tacacho.

Dicho informe se encuentra disponible en el siguiente enlace:
<https://1drv.ms/b/s!AuIuT6DPPvRcjFOQsZdporcLy4wu>

La Misión Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra hace propicia la oportunidad para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - *Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas* - las seguridades de su más alta y distinguida consideración.



Ginebra, 16 de marzo de 2021

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- *Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas* -
Ginebra



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Nota

Número: NO-2021-22831893-APN-DNAJIMDDHH#MJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 15 de Marzo de 2021

Referencia: Comunicación conjunta de Procedimiento Especiales en relación al femicidio de la Sra. Paola Estefanía Tacacho

A: Ana Emilia Sarrabayrouse (DMYAG#MRE), Soledad Capone Huizenga (DMYAG#MRE),

Con Copia A: Andrea Viviana POCHAK (SSPYEIDH#MJ), Moro María Belma (DNAJIMDDHH#MJ),

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a su nota NO-2021-09841162-APN-DMYAG#MRE, vinculada con la comunicación conjunta remitida por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, relativa al femicidio de la Sra. Paola Estefanía Tacacho.

I. Aclaración preliminar: nueva institucionalidad en la República Argentina en materia de género

En primer lugar, es importante destacar la puesta en funcionamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) en el gobierno nacional, en diciembre de 2019[1]. Su creación responde a los compromisos asumidos por Argentina con los derechos de las mujeres y diversidades[2] e implica una jerarquización de los temas de género en la agenda pública.

Ese Ministerio tiene como misión formular, coordinar y llevar adelante políticas con el fin de garantizar a nivel nacional el derecho de las mujeres y LGBTI+ a una vida autónoma, libre de violencias y desigualdades. Sus lineamientos incluyen el diseño, ejecución y evaluación de las políticas en materia de género, igualdad y diversidad; la producción y gestión del conocimiento; la capacitación, formación e innovación; y el diseño e implementación de políticas culturales y de comunicación.

Para desarrollar esas acciones, el MMGyD cuenta, entre otras áreas relevantes, con una Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad y una Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género.

La Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género tiene la función de desarrollar medidas nacionales para prevenir, erradicar y reparar la violencia por motivos de género y para asistir integralmente a las víctimas en todos los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales.

Puntualmente, se encarga de implementar políticas para el abordaje integral de las violencias, y de diseñar programas especiales para grupos específicos en situación de vulnerabilidad. En relación con el tema específico de la Comunicación de referencia, cabe informar que, en el marco de la mentada Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, funciona un área especializada para intervenir en casos de femicidios, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual.

En tanto, la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad tiene entre sus funciones proyectar políticas de igualdad de oportunidades y de derechos con perspectiva de género. En ese ámbito funciona, a su vez, la Subsecretaría de Diversidad que se encarga de impulsar acciones positivas para la inclusión e integración de la población de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, y transgénero, entre otras diversidades, de modo tal de asegurar la igualdad de trato y el ejercicio efectivo de derechos por parte de este colectivo.

Por último, es preciso señalar que el MMGyD se ha propuesto como línea de trabajo prioritaria el diseño e implementación de políticas de formación y capacitaciones en la temática de género y violencia.

II. Información solicitada al Estado en la comunicación conjunta

La información plasmada en el presente documento ha sido recopilada de los aportes remitidos por distintas dependencias del Estado y de diversos documentos oficiales de acceso público.

En efecto, hasta el día de la fecha se recibió información del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán y del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Tucumán.

En base a ello, se remite la información solicitada sobre las situaciones señaladas en la comunicación conjunta, a fin de clarificar las alegaciones allí mencionadas.

1. Las investigaciones en curso respecto del femicidio de Paola Estefanía Tacacho

Del documento remitido por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Tucumán —cuya copia se acompaña en archivo embebido—, surge información sobre las causas iniciadas a raíz de las denuncias efectuadas por la Sra. Paola Estefanía Tacacho en contra del Sr. [REDACTED], así como las acciones llevadas a cabo por ese Ministerio Público en virtud de las actuaciones judiciales iniciadas de oficio a causa del femicidio de la Sra. Paola Estefanía Tacacho.

En tal sentido, el Ministerio Público Fiscal explica, en primer lugar, cuáles fueron las medidas adoptadas por los fiscales intervinientes en las causas penales seguidas contra el Sr. [REDACTED] a raíz de las denuncias interpuestas por la Sra. Paola Estefanía Tacacho entre los años 2016 al 2020.

En efecto, el organismo indica que, de la compulsa de los expedientes tramitados en el ámbito de la justicia penal de la Provincia de Tucumán, surge que los fiscales escucharon en siete oportunidades a la víctima y requirieron cuatro

veces la prohibición de acercamiento en contra de [REDACTED] y a favor de la Sra. Paola Estefanía Tacacho, concretando acciones positivas de protección, tal como lo exige la legislación vigente.

Asimismo, el informe del Ministerio Público tucumano señala que cuando se sospechó fundadamente que [REDACTED] había desatendido la orden de restricción de acercamiento que pesaba sobre él, el fiscal interviniente requirió la elevación de la causa a juicio por el delito de desobediencia judicial (artículo 239 del Código Penal). También se informa que el tribunal no hizo lugar a dicha requisitoria fiscal y ordenó el sobreseimiento del encartado (expediente N° 34121/2016).

En segundo lugar, el documento del Ministerio Público local expone las actuaciones posteriores al femicidio de Paola Estefanía Tacacho. Así, señala que, a partir de darse a conocer la noticia del hecho acaecido el 30 de octubre del año 2020, el organismo tomó intervención de manera inmediata a través de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2, a cargo del Fiscal titular, Dr. [REDACTED], y se creó el legajo S-311615/2020.

Desde entonces se llevaron a cabo múltiples medidas, de distinta naturaleza, tendientes a procurar el esclarecimiento del hecho y, eventualmente, a determinar la posible participación de terceros (coautores, partícipes, instigadores, etcétera). Según informan, continúan llevándose adelante diversas medidas de investigación.

En efecto, se explica que el legajo digital se inició con el sumario policial N° 4735/435, confeccionado por la Comisaría Seccional Primera. En el mismo acto se dio intervención a la División Homicidios, perteneciente a la Policía de la provincia, quienes procedieron a labrar las actuaciones complementarias.

Una vez que el fiscal tomó conocimiento de lo sucedido, se hizo presente en el lugar del hecho y procedió personalmente a tomar diferentes testimonios a personas que habrían presenciado el ilícito. Entre ellas, destacan las entrevistas realizadas a empleados de un local comercial ubicado en la vereda donde se habría perpetrado el hecho. De manera simultánea, personal de la División Homicidios entrevistó a diferentes comerciantes y vecinos de la zona.

También se hizo presente el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), dependiente del Ministerio Público Fiscal —el cual se encuentra dividido en diferentes departamentos y cuenta con personal especializado en materia informática, genética, medicina forense, criminalística, entre otras—. El ECIF procedió a realizar múltiples tareas investigativas. Entre ellas, concretó el levantamiento de evidencias y secuestros, la toma de muestras, el reconocimiento médico legal del cuerpo masculino y femenino, la identificación de la víctima y su agresor, etcétera.

Asimismo, según se explica en el informe, en cumplimiento con el Protocolo de Acompañamiento y Contención a Familiares de Personas Fallecidas instaurado por el Ministerio Público provincial, se hizo presente en el lugar del hecho una licenciada en Psicología perteneciente al equipo de trabajo del Gabinete Interdisciplinario de esa institución.

El informe describe también diversas medidas adoptadas en el marco de la investigación, como el secuestro en el lugar del hecho del teléfono celular de la víctima; la extracción de datos mediante el sistema UFED; las autopsias realizadas en el cuerpo de la víctima y en el de su agresor; la toma de muestras mediante hisopos de manchas pardosrojizas de los efectos secuestrados; el allanamiento en el domicilio de [REDACTED]; y las pericias de los elementos allí secuestrados.

Por último, se expone que el fiscal interviniente entrevistó a personas allegadas a la víctima a fin de averiguar si el femicidio de [REDACTED] habría tenido ayuda por parte de terceros en la comisión del hecho.

A modo de conclusión, el Ministerio Público de la Provincia de Tucumán señala que la causa aún se encuentra en trámite y con medidas solicitadas cuyos resultados, al día de la fecha, aún no fueron obtenidos.

2. Las investigaciones sobre las responsabilidades de actores del Poder Judicial

Al respecto, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán informa que luego de conocerse la noticia del femicidio de la Sra. Paola Estefanía Tacacho por parte del Sr. [REDACTED], se dispuso —mediante la Resolución N° 433/2020 de la Secretaría de Superintendencia—, iniciar una investigación administrativa a fin de deslindar las eventuales responsabilidades que hubieren tenido funcionarios y/o empleados por los hechos del caso. El organismo provincial acompaña una copia de la resolución citada. esas actuaciones administrativas.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán también dispuso iniciar de oficio actuaciones administrativas con motivo del femicidio de Paola Estefanía Tacacho, y acompaña copia de ese expediente interno.

En tal sentido, según se expone, el 2 de noviembre de 2020, la Presidenta de la Corte ordenó oficiar al Cuerpo de Auditores de esa Corte, a fin de que realicen un informe pormenorizado sobre el trámite dado a las denuncias presentadas por Paola Estefanía Tacacho contra [REDACTED], dando urgente trámite a estas actuaciones.

Al día siguiente el Cuerpo de Auditores presentó un primer informe. Tras conocer el resultado, y como ampliación, la Presidenta de la Corte ordenó que se practique una auditoría en las causas que hubieran tramitado por ante el ex Juzgado de Instrucción de la IIIa Nominación relativas a violencia de género. En respuesta, ese mismo día, el Cuerpo de Auditores amplió el informe preliminar y la Presidencia ordenó aportes específicos al Centro de Mediación Judicial, a la Oficina de la Mujer y a la Oficina de Violencia Doméstica, a fines que informen lo pertinente. El 5 de noviembre de 2020, las oficinas señaladas presentaron sus respectivos informes, que fueron agregados en las actuaciones de Superintendencia N° 7220/20, y cuyas copias se acompañan en archivo embebido.

Asimismo, el 20 de noviembre de 2020, el Cuerpo de Auditores presentó el informe relacionado con la auditoría realizada en el Juzgado de Instrucción de la IIIa Nominación, y seguidamente se dispuso efectuar la realización de otra auditoría en las causas tramitadas por ante el Juzgado de Instrucción de la Va Nominación.

Por último, se informa que el 9 de febrero de 2021, el Cuerpo de Auditores remitió el informe final sobre las causas de violencia de género tramitadas en el Juzgado de Instrucción de la Va Nominación, y en igual fecha, se puso en conocimiento de los Vocales de la Corte Suprema el referido informe de auditoría.

Es importante reseñar que, de acuerdo con lo informado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el 22 de diciembre de 2020 tuvo lugar una reunión en la que la Superintendencia de la Corte les informó a las apoderadas y representantes de la Sra. [REDACTED], madre de Paola lo actuado por el tribunal con relación a los hechos del caso.

En este punto, también resulta importante informar un paso dado en el orden nacional, en relación a la respuesta judicial efectiva en casos de violencia de género.

En efecto, el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, en el marco de un plenario extraordinario del Consejo de la Magistratura de la Nación, fue creado el Registro público de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género, mediante la Resolución N° 8/2021, cuya copia se acompaña en archivo embebido.

La creación de este registro respondió a un compromiso asumido por el Estado argentino en un Acuerdo de

Solución Amistosa firmado en el caso de Olga del Rosario Díaz, sobreviviente de un intento de femicidio, en el trámite de una comunicación individual seguida ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

El Acuerdo —firmado el 23 de octubre de 2019, y aprobado en agosto de 2020 por Decreto N° 679/2020 del Presidente de la Nación Alberto Fernández—, establece medidas para reparar a la Sra. Olga del Rosario Díaz, así como disposiciones tendientes a evitar la repetición de los hechos, dado que el caso constituyó un ejemplo de una deficiente respuesta judicial frente a la violencia de género.

Finalmente, ese mismo día, el Consejo de la Magistratura aprobó el protocolo del registro público de denuncias, que establece los supuestos contemplados, el procedimiento para las denuncias, así como el procedimiento para imponer sanciones y la apertura de procesos de remoción y destitución, entre otras cuestiones.

3. Otras intervenciones realizadas en el caso de Paola Estefanía Tacacho

Conforme surge del informe remitido por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación —cuya copia se acompaña en archivo embebido—, ante los hechos trascendidos del caso de Paola Tacacho, el día 31 de octubre de 2020, el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual (DFTTyDIS) se contactó con autoridades de la provincia de Tucumán, quienes informaron acerca las intervenciones que tuvieron en el caso.

Asimismo, desde el MMGyD se realizaron comunicaciones telefónicas directas con familiares y allegados/as de Paola para brindar contención y para acercarles información acerca del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Femicidio, Travesticidio y Transfemicidio. Además, se articuló con autoridades locales con miras a asegurar la contención psicológica necesaria.

El 9 de diciembre de 2020, funcionarias de ese ministerio viajaron a la Provincia de Tucumán donde se entrevistaron con las abogadas de la familia de Paola Tacacho. En la reunión informaron acerca del estado de la causa penal en curso, a la vez que mencionaron que la familia estaba recibiendo acompañamiento desde las áreas locales.

Por su parte, el 18 de febrero de 2021 se dictó la Resolución N° 6/2021/SPVRG#MMGyD mediante la cual la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género resolvió aprobar el ingreso de [REDACTED] al Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata. En consecuencia se dispuso otorgarle la ayuda económica, no reintegrable y no remunerativa allí prevista, y el 26 de febrero de 2021, el MMGyD transfirió los fondos asignados.

Por otro lado, en respuesta a un pedido de audiencia formulado por la Sra. [REDACTED] madre de Paola, al Poder Ejecutivo Nacional el 5 de febrero pasado, la Subsecretaría de Programas Especiales del MMGyD se puso inmediatamente en contacto con ella. El encuentro tuvo lugar el 22 de febrero de 2021 de modo virtual —dado que la familia se encuentra radicada en la Provincia de Salta—. Participaron [REDACTED] y [REDACTED] madre y prima de Paola respectivamente, la Subsecretaria de Programas Especiales y la Directora de abordaje integral de casos de femicidios, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual.

Las familiares de Paola relataron la situación actual que atraviesan, con especial énfasis en la tramitación de la denuncia contra los funcionarios judiciales que intervinieron en las denuncias por acoso y hostigamiento que realizó previo a su muerte. Luego transmitieron algunas necesidades del grupo familiar —en particular respecto a la atención psicológica y a las dificultades de la movilidad entre las provincias de Tucumán y Salta, donde actualmente

residen—. La Subsecretaría se puso a disposición para coordinar junto con el Ministerio de Transporte de la Nación la cobertura de los traslados y/o movilidad para las personas integrantes del grupo familiar y/o allegadas entre Salta y Tucumán. También se comprometió a continuar las articulaciones con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Salta a fin de garantizar la atención psicológica de la Sra. [REDACTED] y de su hijo [REDACTED], hermana de Paola.

4. Medidas adoptadas para incorporar una perspectiva de género en el análisis de denuncias sobre violencia contra las mujeres

En este apartado se brindarán detalles acerca de algunas acciones de fortalecimiento institucional y robustecimiento de las estrategias penales en casos de violencia de género impulsadas por el Ministerio Público Fiscal y la Suprema Corte de la Provincia de Tucumán en el último lustro.

Creación de las Fiscalías Especializadas en Violencia Familiar y de Género

En el año 2018, mediante la Resolución Ministerial N° 402/2018, se dispuso afectar dos Fiscalías de Instrucción a la investigación de aquellos delitos cometidos por motivos de género. De este modo, se buscó fortalecer y profundizar la persecución de dichos ilícitos de considerable connotación social. Asimismo, siguiendo como antecedentes manuales de otras provincias, se aprobó el “Protocolo de buenas prácticas de las Fiscalías de Instrucción Especializadas en Violencia Familiar y de Género”.

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán señala que paulatinamente comenzó un proceso de especialización de sus unidades fiscales. Entre esas fiscalías, creó las abocadas a combatir la violencia familiar y de género.

Creación de la Oficina de Violencia Familiar (O.VI.FAM)

Mediante la Resolución Ministerial N° 043/2017 se creó la Oficina Especializada en Violencia Familiar, compuesta por un equipo interdisciplinario de profesionales calificados en la materia (psicólogos/as, asistentes sociales, médicos/as e ingenieros/as en sistema), cuyos objetivos son los de recolectar la mayor cantidad de pruebas para hacerlas valer en juicio, evitar daños ulteriores y disminuir los niveles de riesgo de víctimas vulnerables.

Capacitaciones conjuntas para el abordaje en materia de género

A través de la Resolución Ministerial N° 007/2019, el Ministerio Público Fiscal dispuso la capacitación de un conjunto de áreas estratégicas —entre ellas, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar y de Género, la Oficina de Recepción de Denuncias y Atención Ciudadana, la Mesa de Entrada Penal, la Oficina de Violencia Familiar (O.VI.FAM) y la Oficina de Gestión—, a fin de coordinar el tratamiento de las causas de violencia de género que ingresen a la justicia penal, procurando la rápida solución del conflicto y evitando desgastes jurisdiccionales.

Capacitación en Ley Micaela

La Provincia de Tucumán adhirió a la ley n° 27.499, de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres. En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal —en tanto parte integrante de uno de los tres poderes del Estado—, procedió a capacitar a todo su personal en la materia.

Turnos permanentes y derivaciones en casos de violencia de género

El fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar y de Género elaboraron un proyecto de actuación que propone brindar respuestas, cargar en el

sistema informático y analizar prioritariamente los casos suscitados en contexto familiar y de género, así como realizar las derivaciones pertinentes en aquellos casos de violencia no penal a otros organismos estatales (Observatorios, Juzgados de Familia, Secretaría de la Mujer, etcétera), entre otras medidas. El proyecto fue aprobado y puesto en conocimiento de todos los fiscales del Ministerio Público Fiscal de la provincia para su ejecutoriedad a mediados del año 2020.

Plan de persecución penal para casos de violencia de género

El Ministerio Público Fiscal —mediante la Resolución Ministerial N° 026/2020— aprobó un Plan de Persecución Penal para casos de Violencia de Género. Este plan —actualmente vigente— tiene como finalidad el cumplimiento de una serie de metas y objetivos que, en términos cualitativos y cuantitativos, logren morigerar el flujo de casos de violencia de género que ingresan la justicia penal, tomando como principal pauta orientativa la solución del conflicto. En este sentido, se puso a disposición de las distintas unidades fiscales, herramientas de trabajo que tornaran más eficaces y eficientes las investigaciones penales en esta temática.

Cambio de régimen procesal: resultados obtenidos

El Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán (aprobado por la ley n° 8.933), actualmente vigente, comenzó a implementarse el 1 de septiembre del año 2020. Este Código instauró el sistema adversarial en la provincia, con su lógica de audiencias y sus reglas de oralidad, publicidad y simplificación. El nuevo sistema procesal significó el abandono de la escrituralidad como principio rector y la pérdida del valor central del expediente en términos probatorios. En el corto período de tiempo que va desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal hasta nuestros días, el nuevo régimen ha posibilitado al Ministerio Público Fiscal la obtención de mayores y mejores resultados en lo que concierne a condenas y a la solución efectiva del conflicto. Dentro de este panorama, y de conformidad con los datos recabados por la Oficina de Gestión, hasta el 5 de marzo de 2021 las Fiscalías Especializadas en Violencia Familiar y de Género lograron un total de 158 condenas y otorgaron 2600 medidas cautelares (entre medidas de restricción de acercamiento y medidas de exclusión del hogar).

Modificaciones al Código Procesal Penal de Tucumán

La sanción de la ley n° 9.377 amplió las facultades de los fiscales en torno a la posibilidad de dictar medidas preventivas urgentes de acuerdo con los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Desde entonces, los fiscales pueden ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia. Dicha medida puede ser ordenada durante cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte. El informe señala que el Ministerio Público Fiscal tuvo un rol preponderante en el impulso de la reforma legislativa, en el entendimiento de que la naturaleza de las medidas cautelares en los supuestos de violencia de género requiere una respuesta urgente por parte de los órganos de administración de justicia. La recepción legislativa de este reclamo supuso un paso adelante en la lucha contrala violencia de género en la justicia penal.

Obtención de pulseras electrónicas

Al tiempo de efectivizarse la reforma procesal referida anteriormente —que permitió incrementar las medidas preventivas urgentes dictadas en la fase inicial de las causas penales por violencia de género—, el informe señala que se puso en evidencia la necesidad de contar con medios óptimos para llevar a cabo un control y seguimiento eficaz del cumplimiento de estas medidas. De este modo, el Ministerio Público Fiscal instó la obtención de pulseras electrónicas a los organismos estatales competentes. En forma paralela, la Oficina de Innovación Tecnológica del Ministerio Público actualmente se encuentra elaborando un *software* con el objetivo de monitorear el uso y

disponibilidad de las pulseras electrónicas. Asimismo, mediante la creación de dicho programa, se procura detectar los vencimientos de las medidas otorgadas y vigiladas por medio de pulseras.

Entrega de equipamiento a comisarías especializadas en violencia de género

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán también ha colaborado a fortalecer áreas de contención y asistencia a las víctimas de violencia de género mediante la entrega de vehículos y otros elementos recuperados del delito a algunas oficinas estatales estratégicas en términos de protección de las víctimas de violencia de género.

Reestructuración de fiscalías: nueva Fiscalía de Violencia Familiar y de Género

Luego de transcurridos seis meses desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán, y habiéndose obtenido un elevado y significativo incremento en términos de condenas por casos de violencia de género, el Ministerio Público Fiscal —mediante la Resolución Ministerial N° 006/2021— creó una nueva Fiscalía en Violencia Familiar y de Género. Todo ello, con el objetivo de continuar reforzando la labor realizada, invirtiendo mayores recursos para la obtención de tales fines. De este modo, actualmente el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Tucumán cuenta con 5 fiscalías especializadas en el abordaje de la temática dotadas de personal calificado en la materia.

Oficina de la Mujer de la Suprema Corte

Por su parte, entre las distintas medidas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de Tucumán para fortalecer la respuesta expeditiva e integral del Poder Judicial a los casos de violencia doméstica o familia en un contexto de violencia de género, se destaca la creación de esta oficina mediante la Acordada 721/12. La Oficina de la Mujer (OM) tiene, entre otras, la función de realizar distintos talleres de capacitación para incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial provincial.

En ese sentido, la Suprema Corte informa que desde enero de 2013 a mayo de 2020 se organizaron más de 185 actividades, con 2.885 personas capacitadas aproximadamente. Desde mayo de 2020 hasta la fecha, se desarrollaron 17 capacitaciones en cumplimiento de la Ley Micaela, con un total de 418 personas capacitadas. Asimismo, el informe brinda información sobre diversas medidas adoptadas por la Oficina de la Mujer.

5. Medidas sobre prevención del feminicidio previstas en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género

Conforme surge del informe remitido por el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, el 3 de julio de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022)[3], en el marco de lo dispuesto en la ley n° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (art. 9, inc. a).

Cada una de las medidas proyectadas en el Plan responde a las obligaciones estatales establecidas en la legislación doméstica y en los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, género y diversidad, en particular en temas de prevención, investigación y reparación de casos de violencia por motivos de género contra las mujeres y diversidades sexuales.

En concreto, se trata de un plan integral que propone abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional una problemática extendida y estructural.

Parte de la premisa de que las violencias por motivos de género constituyen serias violaciones a los derechos humanos y que es el Estado el que debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la promoción y protección de esos derechos, y para asegurar que las mujeres y LGBTI+ puedan desarrollar proyectos de vida autónomos y libres de violencias.

De allí que el Plan incluye más de 100 medidas de responsabilidad directa de 42 organismos, entre ministerios y agencias descentralizadas del Estado Nacional, en materia de prevención, asistencia, protección y reparación de violencias por motivos de género, focalizando, a su vez, en políticas para las violencias más extremas, como los femicidios, travesticidios y transfemicidios.

En relación con este último tema, y entre otras acciones relevantes, amerita informar que —tal como estaba previsto en el Plan—, el MMGyD junto con el Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación crearon, mediante la Resolución Conjunta 2/2020[4], la Mesa Interministerial para el diseño y creación del Programa Interministerial de abordaje integral de las violencias extremas por motivos de género[5].

El programa es una política focalizada y articulada entre los tres ministerios contra las violencias extremas por motivos de géneros, refiriendo a las muertes violentas contra mujeres cis, trans, travestis, y a aquellas personas que sufrieran violencia letal por su identidad de género u orientación sexual.

Cuenta con distintas líneas de trabajo destinadas a la prevención, la asistencia, el fortalecimiento del acceso a justicia, protección, reparación y a la gestión de la información. En el marco de este programa, durante el año 2020 se puso en marcha su Unidad Ejecutora con representantes del MMGyD, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se comenzó la ronda de presentación en la Provincia de Tucumán, para luego hacerlo en todas las provincias argentinas.

Asimismo, la Dirección de Registros y Bases de Datos del MMGyD inició la elaboración de indicadores de riesgo específicos y compatibles con el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género, que está en desarrollo en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de poner en funcionamiento un módulo de análisis de riesgo letal para identificar situaciones, evaluarlas a tiempo y prevenir los casos de mayor gravedad.

Además, como vimos en este caso, el MMGyD cuenta con el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, tal como fue mencionado precedentemente[6], que apunta a brindar asistencia efectiva a aquellas personas del grupo familiar y/o allegados/as de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio.

Puntualmente, el programa está destinado a familiares o allegados/as mayores de 16 años, y establece una ayuda económica para cubrir gastos de movilidad, traslados, alojamiento, alimentación, y atención médica, entre otros. Además, contempla la asistencia psicológica y el asesoramiento legal, ya sea a través de profesionales del MMGyD o de otros organismos con competencia y experiencia en la materia.

En el marco de la implementación del programa se establecen articulaciones con las áreas de género de municipios y provincias de todo el territorio nacional, para encabezar acciones tendientes a garantizar un abordaje integral de los casos de femicidios, travesticidios y transfemicidios.

Otra de las medidas previstas en el Plan Nacional para la prevención de las violencias por motivos de género, es la creación de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad, con la finalidad de emplazarlos en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se procura generar cercanía para que el abordaje integral de las violencias por motivos de género sea federal, multiagencial, interseccional y con anclaje territorial. Estas políticas públicas contemplan la prevención de las violencias y la promoción de derechos, la asistencia integral a personas en situación de violencias por motivos de género, la protección y el fortalecimiento de acceso a la justicia de mujeres y LGBTI+.

El MMGyD elaboró un proyecto que prevé la construcción de 30 centros territoriales y gestionó, en articulación con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación, la priorización de este proyecto para la obtención de financiamiento por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica para su puesta en marcha.

Asimismo, es importante informar que una de las principales medidas del Plan Nacional es la creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, que reemplaza y potencia al Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM). Esta iniciativa forma parte de un mandato legal[7], y ha sido diseñada teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones en la materia formuladas por los distintos órganos de protección internacional, en particular las relacionadas con la necesidad de contar con datos estadísticos fiables[8].

El Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género es la herramienta desarrollada para sistematizar la información sobre consultas y denuncias por violencia de género con el fin de aportar en el diseño y monitoreo de políticas públicas vinculadas a la materia. Tiene la doble funcionalidad de reunir información de todo el país y de ser un instrumento de registro para todos los organismos que lo requieran. Como novedad, incorpora la medición de riesgo de los casos ingresados, como herramienta adicional para apoyar las políticas de prevención, asistencia, sanción y erradicación de las violencias por motivos de género.

Por último, el MMGyD informa que recientemente se ha creado el Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, publicado en el Boletín Oficial el día 22 de febrero de 2021 a través del Decreto N° 123/2021[9].

En orden al sistema federal de gobierno de nuestro país, el mencionado Consejo tiene como objeto crear un ámbito de trabajo interinstitucional que establezca lineamientos rectores a nivel federal que unifiquen las intervenciones en la materia y que garanticen un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios y de otras violencias extremas.

El Consejo se integrará, inicialmente, con las titulares de los Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Posteriormente, a medida que las jurisdicciones acepten la invitación, se incorporarán los/as titulares de los ministerios análogos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el Consejo podrá invitar a participar de las distintas reuniones a las autoridades de los ministerios públicos, de los poderes judiciales y legislativos de las distintas jurisdicciones nacionales.

El MMGyG agrega que, a través del Consejo, se prevé poner a disposición de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un sistema de indicadores de riesgo unificado y materiales de consulta y capacitación técnica en la materia.

III. Palabras finales

Finalmente, esta Secretaría de Derechos Humanos reitera el compromiso de remitir la información adicional que resulte pertinente, en virtud de la política de cooperación que ha tenido históricamente el Estado argentino con el

sistema universal de protección de los derechos humanos.

[1] El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se creó en diciembre de 2019 mediante el Decreto N° 7/2019, cuya norma completa se encuentra disponible en el siguiente link: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223623/20191211>

[2] La República Argentina ha ratificado los principales instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos que prevén disposiciones en materia de igualdad y no discriminación, y que incluyen obligaciones en relación con grupos en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellos las mujeres (la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).

[3] Para acceder más información sobre el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022), puede verse el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero

[4] El texto completo de la Resolución Conjunta 2/2020 se encuentra disponible en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229352/20200515>

[5] El programa fue creado mediante Resolución Conjunta 3/2020 disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=19BD70C015D205D2A0851D287742D310?id=341125>

[6] El programa creado por la Resolución N° 80/2020 disponible en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231788/20200706>

[7] El MMGyD tiene como mandato, a partir de lo dispuesto por la ley 26.485, la producción de información periódica sobre los casos de violencias por motivos de género que ocurren en el territorio nacional (art.9). El entonces Consejo Federal de las Mujeres había transferido dicho mandato al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a partir de un convenio que dispuso la creación del llamado “Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres” (RUCVM). La Línea Nacional 144 era la principal aportante de este registro. Dicho convenio fue revocado en octubre de 2019 por las autoridades del INDEC y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Desde entonces, el RUCVM quedó inactivo. Al respecto, ver: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-GacetillaCompleta-279>

[8] El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI) ha recomendado a la Argentina “Establecer una encuesta nacional de prevalencia de violencia contra las mujeres con cobertura nacional”. Al respecto, ver: “Recomendaciones formuladas al Estado argentino por el mecanismo de supervisión de la Convención (MESECVI)”, 2017, párrafo 112, documento disponible en: <https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/FinalReport2017-Argentina.pdf> En ese mismo sentido, al examinar a la Argentina, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Comité CEDAW) incluyó, como observación transversal a todos los temas específicos, la necesidad de contar con datos estadísticos fiables. Puntualmente, señaló que “El Estado parte debería utilizar esos datos para determinar los ámbitos en que existe

discriminación y como referencia para elaborar sus políticas”. Al respecto, ver: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina” (CEDAW/C/ARG/CO/7), del 25 de noviembre de 2016, párrafo 49.

[9] El texto completo del Decreto N° 123/2021 se encuentra disponible en <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241015/20210222>

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.03.15 16:03:51 -03:00

Gabriela Laura KLETZEL
Directora Nacional
Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de
Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.03.15 16:03:52 -03:00